

1-1-2010

# La desigualdad de género en el régimen matrimonial chileno

Jonas-Sébastien Beaudry

Follow this and additional works at: <http://repository.law.miami.edu/umialr>



Part of the [Comparative and Foreign Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

## Recommended Citation

Jonas-Sébastien Beaudry, *La desigualdad de género en el régimen matrimonial chileno*, 41 U. Miami Inter-Am. L. Rev. 187 (2014)  
Available at: <http://repository.law.miami.edu/umialr/vol41/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by Institutional Repository. It has been accepted for inclusion in University of Miami Inter-American Law Review by an authorized administrator of Institutional Repository. For more information, please contact [library@law.miami.edu](mailto:library@law.miami.edu).

# La desigualdad de género en el régimen matrimonial chileno

Jonas-Sébastien Beaudry\*

I. INTRODUCCIÓN .....	187
II. LA SOCIEDAD CONYUGAL EN CHILE .....	189
A. <i>Régimen matrimonial actual</i> .....	189
B. <i>El proyecto de ley</i> .....	190
i. Contenido de la modificación .....	190
ii. Crítica .....	192
III. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES .....	192
A. <i>La igualdad entre esposos como un tema de igualdad de género</i> .....	192
B. <i>El imperativo de la igualdad entre personas y entre hombres y mujeres</i> .....	193
IV. LA FALTA DE OBJETIVIDAD DE LAS JUSTIFICACIONES PARA MANTENER LA DESIGUALDAD. ....	197
V. ESCRUTINIO OBJETIVO PARA EVALUAR LA DISCRIMINACIÓN DEL GÉNERO .....	201
VI. LA POSTURA DEL SISTEMA INTERAMERICANO .....	204
A. <i>María Eugenia Morales de Sierra v. Guatemala</i> .	204
B. <i>Caso Sonia Arce Esparza v. Chile</i> .....	207
VII. ESTÁNDARES MÍNIMOS EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE ESPOSOS .....	209
A. <i>Administración indistinta de bienes y eliminación del patrimonio reservado</i> .....	209
B. <i>Administración de la mujer de sus bienes propios</i> .....	212
C. <i>Libertad de la mujer en la vida civil</i> .....	214
D. <i>Un régimen matrimonial igual</i> .....	217
VIII. CONCLUSIÓN .....	219

## I. INTRODUCCIÓN

La legislación sobre la sociedad conyugal en Chile es discriminatoria, ya que establece que el hombre es el jefe del hogar y el administrador de la sociedad matrimonial. Adicionalmente, es

---

\* B.C.L., LL.B. (McGill), LL.M. (Harvard). Inscrito al Colegio de los abogados de Québec, Canadá. DPhil Candidate, Law (University of Oxford).

el último régimen matrimonial que establece explícitamente aquella desigualdad todavía vigente, aunque implícitamente, en las Américas.<sup>1</sup>

El fin del presente artículo es el de demostrar argumentativamente la importancia de realizar modificaciones al marco legal actual de Chile relativo al régimen matrimonial, con el propósito de consagrar un nuevo instrumento jurídico que privilegie el tratamiento igualitario de hombres y mujeres en el marco de la sociedad conyugal. Para lograrlo, este artículo tomará un enfoque de derecho internacional de los derechos humanos, al presentar los fundamentos convencionales de la igualdad de género en el ámbito regional e internacional. También tomará un enfoque de derecho comparativo, al examinar los avances de otros países de América Latina en la materia. Por tanto, aunque el artículo apuntará principalmente a develar los argumentos que sustentan la demora del proyecto de ley que permitirá un estatus igualitario a la mujer chilena, este artículo ofrecerá un retrato de lo que significa la igualdad de género dentro de la sociedad conyugal en América Latina.

La segunda sección detallará la situación legal discriminatoria en contra de la mujer casada en Chile, así como el proyecto de ley que se sigue tramitando desde 1995. La tercera, recordará el marco legal de los compromisos democráticos e igualitarios del gobierno chileno, y también de la comunidad internacional en la medida que influye el derecho interno. La cuarta parte del artículo abordará críticamente la persistente retórica jurídica que favorece el trato desigual por razones de género—a partir de lo cual se dará paso a una quinta sección, en la que se opondrá dicha retórica con el criterio objetivo de evaluación de la discriminación propuesto y desarrollado por la Corte Europea, y posteriormente adoptado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La sexta sección analizará la postura actual del Sistema Interamericano sobre la igualdad de género en el marco matrimonial. Para finalizar, la séptima sección articulará estándares mínimos que todo régimen matrimonial debe respetar en consonancia con el principio fundamental de la igualdad de género.

---

1. Basado en un estudio informal hecho por este autor de los regímenes matrimoniales de Argentina, Bolivia, Brasil, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Republica Dominicana, Salvador, Uruguay, Venezuela.

## II. LA SOCIEDAD CONYUGAL EN CHILE

### A. *Régimen matrimonial actual*

La “sociedad conyugal” es el régimen matrimonial de carácter legal supletorio; es decir que se contrae por el mero hecho del matrimonio a falta de pacto en contrario para someterse a un régimen distinto.<sup>2</sup> Si bien existen otros dos regímenes, el de la “separación total de bienes” y el de la “participación en los gananciales,” la sociedad conyugal sigue estando mayoritariamente vigente en Chile.<sup>3</sup> Como lo discutiremos a continuación, el régimen legal actual de la sociedad conyugal corresponde a una concepción tradicional de la pareja matrimonial en el que el hombre es el jefe del hogar, y aunque expresa los valores de la sociedad chilena no es cierto que sea la forma más común en Chile. Será más bien simplemente porque se contrae automáticamente al casarse si los esposos no pactaron otro régimen en capitulaciones matrimoniales.

Bajo este régimen, la mujer no tiene capacidad legal para administrar su patrimonio, porque el hombre es el único administrador de los bienes sociales y de los bienes propios de su mujer.<sup>4</sup> El Código Civil estipula además que “el marido es, respecto de terceros, dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio”<sup>5</sup> y que la mujer, por consiguiente “por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la sociedad”<sup>6</sup> y tampoco sobre su propiedad que administra el marido.<sup>7</sup>

Aunque existan limitaciones a la gestión del marido<sup>8</sup> y que la mujer pueda administrar la sociedad conyugal en caso de impedimento del marido,<sup>9</sup> o pedir la autorización judicial para ejecutar un acto legal específico sobre un bien propio suyo, “si el marido se

---

2. Véase CÓDIGO CIVIL [Cód. Civ.] art. 1718 (Chile).

3. Actualmente del total de matrimonios en Chile, el cincuenta y ocho por ciento se casa bajo la sociedad conyugal. Véase *Ministra Alborno se reúne con mujeres víctimas del sistema de sociedad conyugal*, AMNISTIA INTERNACIONAL CHILE, Oct. 22, 2008, disponible en [http://www.cl.amnesty.org/g\\_noticias.shtml?sh\\_itm=70545bffd8a7b25a5acef641d8f73c4a](http://www.cl.amnesty.org/g_noticias.shtml?sh_itm=70545bffd8a7b25a5acef641d8f73c4a).

4. Véase Cód. Civ. art. 1749 (Chile) (“El marido es jefe de la sociedad conyugal, y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer.”).

5. *Ib.*, art. 1750.

6. *Ib.*, art. 1752.

7. Véase *ib.* art. 1754.

8. Por ejemplo, el marido debe obtener la autorización de la mujer para enajenar los bienes raíces sociales propios de ella. Véase *ib.*, arts. 1749 & 1754.

9. Véase *ib.*, art. 1758.

negare injustificadamente” a ejecutarlo,<sup>10</sup> la gestión ordinaria de la sociedad conyugal la hace el marido, designado “jefe de la sociedad conyugal” por la ley.<sup>11</sup>

Entre otras organizaciones, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas<sup>12</sup> y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer [CEDAW]<sup>13</sup> han deplorado esta situación de desigualdad todavía vigente en Chile. Adicionalmente, respondiendo a la Comisión de Familia de la H. Cámara de Diputados que solicitó su opinión, el profesor Gonzalo Figueroa Yañez explicó que “[e]sta situación repercute negativamente en las relaciones interconyugales y paterno-filiales, al conceder al marido y padre un mayor poder económico y social que el que se confiere a la mujer y madre.”<sup>14</sup>

### B. *El proyecto de ley*

#### i. Contenido de la modificación

Con el Proyecto de Ley, que modifica el Código Civil respecto al régimen patrimonial del matrimonio (Boletín N° 1707-18), se reemplaza el régimen de “Sociedad conyugal” por el régimen de

---

10. Cód. Civ. art. 138 bis (1) (Chile).

11. Véase *ib.* art. 1749. Véase también *ib.*, art. 135 (“Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, y toma el marido la administración de los de la mujer.”).

12. Véase Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas [CCPR], *Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos : Chile*, párr. 16 Documento de la Organización de las Naciones Unidas [ONU Doc.] CCPR/C/79/Add.104 (30 de marzo 1999) (“El Comité se siente profundamente preocupado por las disposiciones jurídicas vigentes que discriminan a la mujer en el matrimonio. Las reformas jurídicas en virtud de las cuales las parejas casadas pueden optar por no someterse a las disposiciones discriminatorias, como las relativas al régimen de bienes y la patria potestad, no eliminan la discriminación en las disposiciones jurídicas fundamentales que sólo pueden ser modificadas con el consentimiento del cónyuge. Por consiguiente: Es preciso abolir toda ley que establezca discriminación entre el hombre y la mujer.”).

13. Véase Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, *Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer : Chile*, ONU Doc. A/54/38, párrs. 202-235 (25 de junio de 1999) (“Para el Comité es motivo de preocupación la desprotección de las mujeres en materia de derecho de familia, lo cual limita, entre otras cosas, la capacidad de la mujer para administrar sus propios bienes o los bienes poseídos en común. . . . Esos aspectos resultan gravemente discriminatorios para la mujer, tanto en sus relaciones familiares como en lo que atañe al pleno ejercicio de sus derechos económicos y sociales.”).

14. Gonzalo Figueroa Yañez, Informe en derecho acerca del proyecto de ley que modifica el código civil y leyes complementarias en materia de sociedad conyugal o comunidad de gananciales, otorgando a la mujer y el marido iguales derechos y obligaciones (Boletín No 1707-18, marzo de 1997), pp. 2-3.

“Comunidad de gananciales” que se contrae por el hecho del matrimonio.<sup>15</sup> El profesor Gonzalo Figueroa Yañez nota que “[e]ste es, sin duda, la reforma fundamental del proyecto.”<sup>16</sup>

Se mantiene la división entre bienes “comunes” (antes “sociales”) y “propios” de cada cónyuge, pero la ley pone fin a la desigualdad arbitraria entre el hombre y la mujer en la administración de los patrimonios que les corresponden. Los nuevos artículos proponen estipular que “[e]l haber de la comunidad se compone [d]e todos los bienes actuales . . . que hayan sido adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio a título oneroso”<sup>17</sup> y que cada cónyuge tiene dominio exclusivo sobre los inmuebles que adquirió antes de contraer matrimonio.<sup>18</sup>

Se deja sin efecto la administración a cargo del hombre como “jefe de la sociedad conyugal.” “La mujer y el marido gozan de *iguales derechos* y tienen las mismas obligaciones.”<sup>19</sup> “Durante el matrimonio cada cónyuge goza y administra libremente su patrimonio,”<sup>20</sup> quedando solo algunos actos sujetos a la autorización del otro.<sup>21</sup> El régimen de administración extraordinaria se aplica según la ley *a ambos cónyuges* indistintamente<sup>22</sup> y no sólo para el caso de impedimento de la mujer.<sup>23</sup>

También se derogan los artículos del Código referidos a la separación de los bienes respecto al ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria por parte de la mujer casada, y se elimina la categoría de “patrimonio reservado a la mujer casada.”<sup>24</sup> Consecuentemente, se deroga la facultad de la mujer de renunciar a

---

15. PROYECTO DE LEY CÓD. CIV., art. 1725 (Chile).

16. Véase Figueroa Yañez, *supra* nota 14, p. 3.

17. PROYECTO DE LEY CÓD. CIV., art. 1725 (Chile).

18. Véase *ib.* art. 1736, inc. 1°.

19. *Ib.*, art. 132.

20. *Ib.*, art. 1749.

21. Por ejemplo, enajenar o gravar voluntariamente los bienes raíces. Véase *ib.*, art. 1749.

22. Véase *ib.*

23. En caso de algún impedimento de uno de los cónyuges, la autorización de este podrá ser suplida por el juez si el cónyuge quiere enajenar o gravar, prometer enajenar o gravar los bienes raíces, los vehículos motorizados destinados a su uso personal o de la familia común, y las acciones en sociedad anónimas que hayan adquirido a título oneroso durante la vigencia del régimen de comunidad de gananciales; constituirse en avalista, codeudor solidario o fiador respecto de las obligaciones contraídas por terceros, como también para otorgar cualquiera otra clase de caución respecto de esas mismas obligaciones, dar en arriendo o ceder la tenencia de los bienes raíces urbanos por más de cinco años, o los rústicos por más de ocho. Véase PROYECTO DE LEY CÓD. CIV., art. 1749 (Chile).

24. *Ib.*, art. 151, párr. 13 (“Derógase el artículo 150.”).

los gananciales para quedarse con su patrimonio reservado.<sup>25</sup>

## ii. Crítica

Este proyecto de ley constituyó un paso positivo pero insuficiente para asegurar que la ley no estereotipe rígidamente una división de roles para uno y otro género que no corresponden ni con la nueva realidad social, ni con la voluntad política de Chile de respetar sus compromisos convencionales con respecto a la igualdad de género.

En primer lugar, dicho proyecto de ley fue insuficiente porque, después de catorce años, aún no ha sido sancionado. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) notó en el 2006 que “le preocupa el lento progreso en la introducción de nuevas reformas legales, en particular el proyecto de ley por el que se establece un nuevo régimen patrimonial por el que se concede al marido y a la mujer iguales derechos y obligaciones, que ha estado pendiente desde 1995.”<sup>26</sup>

En segundo lugar, fue insuficiente porque “[q]ueda todavía una clara discriminación a favor del marido, del padre natural o ilegítimo o simplemente del hombre” en cuanto a la autoridad, patria potestad, administración y usufructo de los bienes, representación y guardas de los hijos.<sup>27</sup>

A continuación, delinearemos, a partir de normas y principios fundamentales de derechos humanos nacionales e internacionales, estándares mínimos en materia de igualdad entre esposos que todo proyecto de ley futuro deberá tener en cuenta.

## III. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

### A. *La igualdad entre esposos como un tema de igualdad de género*

El principio de igualdad entre cónyuges se desprende del principio más general de igualdad entre los hombres y las mujeres. La superación de la desigualdad entre esposos se ha venido conquistando paralelamente con la evolución hacia una concepción reivindicativa de los derechos de las mujeres.

---

25. *Ib.* Véase también *ib.*, art. 150.

26. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer [CEDAW], *Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile*, párr. 8, ONU Doc. CEDAW/C/CHI/CO/4 (25 de agosto de 2006).

27. Figueroa Yañez, *supra* nota 14, pp. 2-3.

Por ejemplo, la moción apoyando el proyecto de ley antedicho modificadorio del régimen matrimonial chileno, proponía fundamentalmente las siguientes justificaciones:

No hay argumentos biológicos, psicológicos o antropológicos que justifiquen la subordinación jurídica de la mujer, toda vez que pierde relevancia sostener la exigencia de haber un solo administrador de bienes en el matrimonio, aun cuando hubiere excepciones, cuyas normas restrictivas se refieren a la mujer casada, pero no para la soltera o viuda, dado que en este nuevo contexto, junto con considerarlo moralmente injusto, debido a que las personas independiente de su sexo tienen la misma capacidad intelectual, no justifica de manera alguna una ley discriminatoria.<sup>28</sup>

*B. El imperativo de la igualdad entre personas y entre hombres y mujeres*

Como lo declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principio de igualdad—no solamente entre hombres y mujeres, sino también entre todos los seres humanos—

... se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incurso en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.<sup>29</sup>

El principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley está consagrado en muchos instrumentos internacionales.<sup>30</sup> Del

---

28. BOLETÍN N° 1707-18, PROYECTO DE LEY CÓD. CIV., Tramitación de Proyectos, *Moción de los Diputados señorita Saa, señoras Prochelle, Rebolledo y Pollarolo, y señores Palma (don Andrés), Jocelyn-Holt, Balbontín y Pérez (don Aníbal). Modifica el Código Civil y leyes complementarias en materia de sociedad conyugal o comunidad de gananciales otorgando a la mujer y el marido iguales derechos y obligaciones* (04 de octubre de 1995).

29. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización, 1984 Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser. A) N° 4, párr. 55 (19 de enero de 1984), disponible en [http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_04\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf).

30. Algunos de estos instrumentos internacionales son:  
Carta de la Organización de los Estados Americanos art. 3.1, 30 de abril de 1948, 119



U.N.T.S. 48; Organización de los Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos arts. 1 & 24, 22 de noviembre de 1969, O.A.S.T.S. N° 36, 1144 U.N.T.S. 123, *disponible en español a* <http://www.cidh.org/Basicos/Basicos2.htm>; Organización de los Estados Americanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre art. 2, 1948, O.A.S. Res. XXX, *reimprimido en* OEA/Ser.L.V/II.82 doc. 6 rev. 1 a 17 (1992); Organización de los Estados Americanos, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales art. 3, 17 de noviembre de 1988, O.A.S.T.S. N° 69 [de aquí en adelante Protocolo de San Salvador]; Carta de las Naciones Unidas art. 1, párr. 3; Declaración Universal de Derechos Humanos, Asamblea General ("A.G.") Resolución 217A, arts. 2 & 7, Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas ("ONU GAOR"), 3ª Sesión, 1ª reunión plenaria, Documento de las Naciones Unidas ("ONU Doc.") A/810 (12 de diciembre de 1948); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.G. Resolución 2200A (XXI), art. 2, párr. 2, art. 3, 21 ONU GAOR Suplemento (N° 16), p. 49, ONU Doc. A/6316 (16 de diciembre de 1966); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, A.G. Resolución 2200A (XXI), arts. 2, & 26, 21 ONU GAOR Suplemento (N° 16), p. 52, ONU Doc. A/6316 (16 de diciembre de 1966); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, A.G. Resolución 2106A (XX), art. 2, 20 ONU GAOR Suplemento (N° 14), p. 47, ONU Doc. A/6014 (21 de diciembre de 1965); Convención sobre los Derechos del Niño, A.G. Resolución 44/25, art. 2, 44 ONU GAOR Suplemento (N° 49), p. 167, ONU Doc. A/44/49 (20 de noviembre de 1989); Declaración de los Derechos del Niño, A.G. Resolución 1386 (XIV), Principio 1, 14 ONU GAOR Suplemento (N° 16), p. 19, ONU Doc. A/4354 (20 de noviembre de 1989); Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, A.G. Resolución 45/158, arts. 1, 7, 18.1, 25, 27, 28, 43, 45.1, 48, 55 & 70, 45 ONU GAOR Suplemento (N° 49A), p. 262, ONU Doc. A/45/49 (18 de diciembre de 1990); Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, A.G. Resolución 34/180, arts. 2, 3, & 5-16, 34 ONU GAOR Suplemento (N° 46), p. 193, ONU Doc. A/34/46 (18 de diciembre de 1979); Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones, A.G. Resolución 36/55, arts. 2 & 4, 36 ONU GAOR Suplemento (N° 51), p. 171, ONU Doc. A/36/684 (25 de noviembre de 1981); Organización Internacional del Trabajo (OIT), Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, art. 6, (18 de junio de 1998) 37 I.L.M 1233; OIT, Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado) art. 6, 1 de julio de 1949, 120 U.N.T.S. 70; Convenio N° 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación arts. 1-3, 25 de julio de 1958, 362 U.N.T.S. 31; Convenio N° 143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Trabajadores Migrantes (disposiciones complementarias) arts. 8 & 10, U.N. Doc. E/CN.4/1998/76 (4 de junio de 1975); Convenio N° 168 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Fomento del Empleo y la Protección contra el Desempleo art. 6, 1 de junio de 1998, Organización Internacional del Trabajo No. 168 ("ILO"), 71 ILO Boletín Oficial 80; Proclamación de Teherán, Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán párrs. 1, 2, 5, 8 & 11, UNU Doc. A/CONF. 32/41, p. 3 (13 de mayo de 1968); Declaración y Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos sess. I.15; I.19; I.27; I.30; II.B.1, arts. 19-24, sess. II.B.2, arts. 25-27, UNU Doc. A/CONF.157/24 (Parte I), p. 20 (14 a 25 de junio de 1993); Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, A.G. Resolución 47/135, anexo, arts. 2, 3, 4.1 & 5, 47 ONU GAOR Suplemento (N° 49), p. 210, ONU Doc. A/47/49 (18 de diciembre de 1992); Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, Programa

mismo modo, el principio fundamental de igualdad entre hombres y mujeres es un principio establecido tanto en derecho internacional,<sup>31</sup> como en el derecho nacional chileno.<sup>32</sup> Por consiguiente, es un objetivo local que se inscribe en un movimiento global.<sup>33</sup> Así,

---

de Acción párrs. 1, 2, 7, 9, 10, 16, 25, 38, 47, 48, 51, 66 & 104, UNU Doc. A/ CONF.189/ 12 (8 de septiembre de 2001); Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza art. 3, 14 de diciembre de 1960, 429 U.N.T.S. 93; Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9, UNO Doc. E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.1, anexo V (27 de noviembre de 1982); Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales de País en que Viven, A.G. Resolución 40/144, anexo, arts. 5.1.b & 5.1.c, 40 UNO GAOR Suplemento (No° 53), p. 252, UNU Doc. A/40/53 (13 de diciembre de 1985); Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea arts. 20 & 21, 2000 O.J. (C 364) 1 (7 de diciembre de 2000); Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales arts. 1 & 4, 1 de noviembre de 1998, 213 U.N.T.S. 222; Carta Social Europea arts. 19.4, 19.5 & 19.7, 18 de octubre de 1961, 529 U.N.T.S. 89; Protocolo N° 12 al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales art. 1, ETS No. 177, Rome, 4.XI.2000 (4 de noviembre de 2000); Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos "Carta de Banjul" arts. 2 & 3, 27 de Julio de 1981, Organización de Unidad Africana ("OAU") Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58; Carta Árabe sobre Derechos Humanos art. 2, 22 de mayo de 2004, 12 Int'l Hum. Rts. Rep. 893; y Declaración de El Cairo sobre Derechos Humanos en el Islam art. 1, UNO GAOR, Conferencia Mundial Sobre los Derechos Humanos, 4 Sess., artículo 5 de la agenda, UNO Doc. A/ CONF.157/PC/62/Add.18 (5 de Agosto de 1990).

31. Véase, por ejemplo, A.G. Resolución 34/180, *supra* nota 30, arts. 1, 2(f), & 15(1) (estableciendo, en parte, que "[l]os Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley"); Convención Americana sobre Derechos Humanos, *supra* 30, art. 17(4) ("Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo."); A.G. Resolución 2200A (XXI), *supra* nota 30, art. 23(4) ("Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.").

32. En 1999, la Ley chilena 19611 estableciendo igualdad jurídica entre hombres y mujeres en Chile modificó la Constitución Política de la República de Chile, sustituyendo en el inciso primero del artículo 1°, la expresión "[l]os hombres" por "[l]as personas" y agregando al final del párrafo primero del número 2° del art. 19 la oración "Hombres y mujeres son iguales ante la ley." Véase Ley 19.611, 16 de junio de 1999, *disponible en* [www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=137783&idVersion=1999-06-16&idParte](http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=137783&idVersion=1999-06-16&idParte).

33. El tercer objetivo de desarrollo del milenio de la Organización de las Naciones Unidas es el de promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. Véase Organización de las Naciones Unidas, Objetivos de desarrollo del Milenio 18 (2009), *disponible en* [http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG\\_Report\\_2009\\_SP\\_r3.pdf](http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2009_SP_r3.pdf). Véase también Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ONU Doc. A/CONF.177/20 y A/CONF. 117/201 Add. 1 (15 de septiembre de 1995), *disponible en español en* <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf>; Resolución del Consejo de Seguridad 1325, ONU Doc. S/RES/1325 (31 de octubre de 2000), *disponible en español en* [http://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325\(2000\)-S.pdf](http://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-S.pdf) (sobre mujeres, paz, y seguridad).

las motivaciones para cambiar el régimen matrimonial chileno no solamente son basadas en la nueva y más realista concepción de las capacidades de la mujer sino también en la cultura legal internacional. Una de las razones propuestas en la moción apoyando el proyecto de reforma chilena estipula que:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza la igualdad de derechos al hombre y a la mujer, en cuanto al matrimonio, durante éste y en caso de su disolución; la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación en contra de la Mujer, le otorga los mismos derechos a ambos cónyuges en materia de propiedad, administración, goce y disposición de los bienes; de igual manera los códigos civiles comparados o de familia en su caso, han equiparado a la mujer y el marido casados en un régimen de comunidad restringida de ganancias.<sup>34</sup>

Chile no solamente tiene la obligación constitucional de asegurar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres<sup>35</sup> sino también está obligado por el derecho internacional. Dada la incorporación del principio de igualdad y de no discriminación de género en las constituciones de la mayoría de los países del mundo y en convenciones también ratificadas por la mayoría de los Estados, se puede considerar que el principio de igualdad de género logró el estatus de *ius cogens*, el cual impone una obligación *erga omnes* a todos los Estados de promover esta igualdad. Más específicamente, Chile es Estado parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y de la Convención Americana sobre DDHH.

Finalmente, cabe anotar que la igualdad de género hace parte del “compromiso igualitarista” que define una sociedad democrática. El Informe 2008 del Programa de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, en Chile, destacó que para respetar la igualdad de sus ciudadanos efectivamente, “los Estados deben redoblar sus esfuerzos por respetar y garantizar los derechos de todos y, en particular, los de aquellos grupos que suelen ser objeto de violencia,

---

34. BOLETÍN N° 1707-18, PROYECTO DE LEY CÓD. CIV., Tramitación de Proyectos, Moción de los Diputados señorita Saa, señoras Prochelle, Rebolledo y Pollarolo, y señores Palma (don Andrés), Jocelyn-Holt, Balbontín y Pérez (don Aníbal). Modifica el Código Civil y leyes complementarias en materia de sociedad conyugal o comunidad de ganancias otorgando a la mujer y el marido iguales derechos y obligaciones (04 de octubre de 1995).

35. Véase *supra* el texto acompañando nota 32.

discriminación y dominación.”<sup>36</sup> En otras palabras, el tema de la igualdad de género se inscribe en el compromiso de Chile hacia la democracia y la igualdad. Pero estos conceptos no deben ser abstractos sino que deben aplicarse concretamente, y por ello, Chile debe dimensionar los problemas experimentados por las mujeres incluso en los ámbitos más privados de lo social, como la familia.<sup>37</sup>

#### IV. LA FALTA DE OBJETIVIDAD DE LAS JUSTIFICACIONES PARA MANTENER LA DESIGUALDAD.

En esta sección, examinaremos la validez de los argumentos a favor de un tratamiento jurídico discriminatorio de las mujeres dentro del matrimonio. Estas actuales argumentaciones consideran que la subordinación de la mujer por su marido no implican, *per se*, un trato discriminatorio.

Efectivamente, el principio de igualdad es fundamental y obligatorio, pero no significa que todo tratamiento *diferente* será *discriminatorio*. En su opinión OC-4/84 del 19 de enero de 1984 sobre la propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización, la Corte Interamericana sostuvo que existen “ciertas desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento jurídico” sin resultar en discriminación en la medida en que el tratamiento diferente sea “un vehículo para realizarla o para proteger a quienes aparezcan como jurídicamente débiles.”<sup>38</sup>

Por lo tanto, el tratamiento diferente de la mujer en el matrimonio puede basarse en la hipótesis de que la ley establezca un tratamiento jurídico diferente según el género para amparar a las mujeres, lo que debería implicar que las mujeres necesitan protección y que esta ley les brinde la protección necesitada.

Por ejemplo, el profesor de derecho civil, abogado y político, Pablo Rodríguez Grez escribió que la legislación que regula la institución del matrimonio es protectora de la mujer.<sup>39</sup> Aún

---

36. Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales, Informe DDHH, Derechos humanos de las mujeres 327 (2008), *disponible en* [http://www.udp.cl/derecho/derechoshumanos/informesddhh/informe\\_08/Derecho\\_hum\\_Mujeres.pdf](http://www.udp.cl/derecho/derechoshumanos/informesddhh/informe_08/Derecho_hum_Mujeres.pdf).

37. *Ib.*

38. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización, 1984 Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser. A) N° 4, párr. 56 (19 de enero de 1984), *disponible en* [http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_04\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf).

39. PABLO RODRÍGUEZ GREZ, REGIMENES PATRIMONIALES 11 (Editorial Jurídica de Chile 1997).

afirma que “el movimiento feminista” que trataría a los hombres y a las mujeres igualmente “por una errada concepción de la dignidad de la mujer, sólo contribuye a desmejorar su situación.”<sup>40</sup> La falacia repetida al largo del argumento es que si se pone fin a la legislación discriminatoria menospreciando la dignidad de la mujer, se pone fin a la protección necesitada por las mujeres.

Proteger a las mujeres es un objetivo legítimo, pero para proponerlo hay que establecer si efectivamente las mujeres requieren dicha protección, y definir bajo el criterio de la objetividad<sup>41</sup> el medio más idóneo para ello. Aunque las hipótesis del profesor Rodríguez Grez suscitan asuntos importantes, él las soporta de manera vaga. Es difícil imaginarse, por ejemplo, como podría perjudicar a las mujeres el derecho de administrar los bienes comunes de la sociedad conyugal.

Al analizar la validez de un artículo del Código Civil que atribuía jurídicamente la representación de la sociedad conyugal al marido, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala sostuvo que era justificado el artículo por la “certeza y la seguridad jurídica.”<sup>42</sup> También validó el artículo que otorgaba autoridad al marido para administrar el patrimonio conyugal por las mismas razones y porque otro artículo preveía que la mujer tendrá derecho a expresarse sobre materias que interesan la economía familiar.<sup>43</sup>

Igualmente, la “certeza jurídica” es indudablemente un objetivo legítimo, pero es muy dudoso que sea necesario subordinar legalmente a las mujeres dentro del matrimonio para lograr aquel objetivo.

Estos dos ejemplos ilustran por su vaguedad, por qué es tan importante establecer un escrutinio estricto para juzgar si un tratamiento diferente es discriminatorio, y reprobado la retórica legal que justifica la discriminación al enfocar sobre objetivos públicos importantes (como en los ejemplos arriba mencionados, la protección de las mujeres o la certeza jurídica) y afirmar injustificadamente que éstos serían amenazados de no existir la situación de desigualdad.

---

40. *Ib.*, p. 15.

41. O sea, establecer que el tipo de protección propuesto es necesario para proteger a las mujeres, y que no existieran medidas menos perjudiciales para las mujeres que lograrían los mismos objetivos.

42. María Eugenia Morales de Sierra v. Guatemala, Caso 11.625, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 4/01, OEA/Ser./L/V/II.111 doc. 20 rev., párr. 34 (2001), *disponible en* <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloII/Fondo/Guatemala11.625.htm>.

43. Véase *ib.*

Según mi comprensión de los argumentos tradicionales a favor de un tratamiento diferente de las mujeres, estos solo se pueden basar sobre dos justificaciones. La primera es una concepción errónea de las capacidades “naturales” de las mujeres—como en el caso, por ejemplo, de personas con discapacidades mentales o físicas, o de niños.<sup>44</sup> Este tipo de justificación es ahora considerada sin fundamento y prejudicial en el caso de la mujer:

En el primer tercio del presente siglo se inicia un movimiento contra estos principios tradicionales, tanto por el reconocimiento de la capacidad decisiva de la mujer, como por la difusión de la igualdad de los sexos dentro del concepto de la no discriminación por razón del mismo. Esta evolución, que se puede comprobar con un análisis de derecho comparado, encuentra su impulso determinante desde el plano internacional.<sup>45</sup>

La segunda justificación, todavía vigente, es pretender que los diferentes tratamientos sean necesarios para compensar las realidades sociales de la desigualdad. En aquellos casos, los tratamientos jurídicos diferentes corren el riesgo de excusar, aprobar y fortalecer estas mismas realidades sociales de desigualdad que pretenden corregir.

La estrategia para lograrlo es similar a la de la retórica naturalista que fue comúnmente usada para argüir que la mujer era “naturalmente” incapaz, como los niños. Aunque no se pueda sostener plausiblemente hoy en día que las mujeres son naturalmente discapacitadas física o intelectualmente, esta retórica naturalista sigue existiendo a través de una descripción del orden natural de la sociedad; o sea, en lugar de ofrecer una descripción normativa de la naturaleza de las mujeres en sí mismas, ofrece un retrato normativo del orden social. Esta justificación, como muchos argumentos naturalistas usados en la esfera política, se vuelve una profecía que se retroalimenta y se auto-realiza. Se puede observar el carácter autoreferente y axiomático de esta

---

44. Véase, por ejemplo, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, 2002 Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser. A) N° 17, párr. 137(3) (28 de agosto de 2002), disponible en [http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_17\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf) (decidiendo que el principio de igualdad “no impide la adopción de reglas y medidas específicas en relación con los niños, los cuales requieren un trato diferente en función de sus condiciones especiales”) (énfasis agregado).

45. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización, 1984 Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser. A) N° 4, párr. 65 (19 de enero de 1984), disponible en [http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_04\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf).

retórica naturalista al leer el argumento del profesor Rodríguez Grez, que tipifica este tipo de argumento.

La legislación que regula esta institución [del matrimonio] se forjó al amparo de un hecho *indesmentible*: las diferencias de todo orden que existen entre el hombre y la mujer. *Desde luego*, cabe a cada uno de ellos roles diametralmente distintos en el funcionamiento de la familia, en la vida laboral, y en la relación con los descendientes comunes. A partir de esta constatación, la ley fue evolucionando, generándose una legislación “protectora” de la mujer, atendido el hecho de que ella estaba en situación de menoscabo respecto del marido. . . . *Es indiscutible* que el hombre y la mujer tienen roles y funciones muy diversos en el matrimonio, sea por obra de los hábitos, costumbres o valoraciones ancestrales y, aun, por efecto de las diferencias biológicas que la ley no puede soslayar. *En nuestra sociedad corresponde al hombre la obligación esencial* de procurarse los medios de subsistencia para el núcleo familiar, y a la mujer el cuidado preferente de la prole. Se dirá que este enfoque representa una visión retrograda de la pareja. . . . *Dígase lo que se quiera, pero lo cierto e irrefutable es que*, en el actual estado de evolución en nuestro medio, estas funciones *están perfectamente asumidas en la inmensa mayoría* de las parejas matrimoniales.<sup>46</sup>

Pero no existe alguna necesidad lógica para que una situación desigual cambie. El hecho de que todavía exista una práctica desigual, no constituye una justificación en contra del cambio—si existe voluntad para ello. Es difícil imaginarse que las mujeres chilenas actualmente quieren quedarse sin capacidad legal para controlar los bienes de la sociedad conyugal y aun sus bienes propios. De hecho, las estadísticas del Servicio Nacional de la Mujer del Gobierno de Chile muestran lo contrario.

En Chile, entre 1990, el 21% de los jefes de hogar eran mujeres y el 79% eran hombres. El porcentaje de participación de las mujeres jefes de hogar se incrementó en un 10% en diez años, alcanzando un 31.5% en 2002.<sup>47</sup> En el 2001, el 70.1% de los hombres y el 80.8% de las mujeres creían que “la marginación de la mujer [tenía] su origen en la estructura tradicional de la

---

46. RODRÍGUEZ GREZ, *supra* nota 39, pp. 11-12 (énfasis agregado).

47. Hogares según sexo del jefe de hogar. Estadísticas del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), en línea: [http://www.sernam.cl/cedocvi/web/fus\\_index.php?sec=2](http://www.sernam.cl/cedocvi/web/fus_index.php?sec=2) (Fuente: INE. Encuesta Suplementaria de Ingresos. Trimestre Oct-Dic.).

familia.”<sup>48</sup> Adicionalmente, solo el 21% de las mujeres y el 42.2% de los hombres pensaban que “el marido [debía] ser el principal responsable de las decisiones de mayor importancia.”<sup>49</sup>

#### V. ESCRUTINIO OBJETIVO PARA EVALUAR LA DISCRIMINACIÓN DEL GÉNERO

Fue precisamente a causa de la manipulación de los argumentos a favor de tratamientos jurídicos diferentes, que se elaboraron criterios de proporcionalidad en vía de los derechos humanos, tanto en el plano internacional como en el nacional. La meta de estos criterios es asegurar que los argumentos que tratan de justificar leyes potencialmente discriminatorias sean objetivos.

Por ejemplo, bajo el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, La Corte Europea de Derechos Humanos estableció que un tratamiento diferente será discriminatorio: (1) si no persigue un objetivo legítimo o (2) si no existe una relación de proporcionalidad razonable entre los medios empleados y el objetivo perseguido.<sup>50</sup> Además, lo que constituye un objetivo legítimo debe ser interpretado a la luz de las condiciones actuales.<sup>51</sup>

Se adoptó un escrutinio aun más severo para casos de tratos diferentes basados en el género y este criterio fue adaptado por el sistema interamericano:

Las distinciones estatutarias basadas en criterios vinculados a condiciones tales como la raza o el sexo, exigen un escrutinio más intenso. Lo que la Corte y la Comisión Europeas han afirmado también rige para las Américas, es decir, que dado que “el avance de la igualdad de los sexos es hoy un objetivo muy importante,” . . . “tendrían que mediar razones de mucho peso” para justificar una distinción basada únicamente en razones de sexo.<sup>52</sup>

---

48. Encuesta de opinión pública, SERNAM 2001, *Hombres y mujeres: Como ven hoy su rol en la sociedad y en la familia*, Documento de Trabajo 78, Gobierno de Chile, SERNAM, 2002, p. 17.

49. *Ib.*, p. 26.

50. *Fretté v. France*, Número 36515/97, Corte Europea de Derechos Humanos, 2002-I Eur. Ct. H.R. 345, párr. 34.

51. Véase *ib.*

52. María Eugenia Morales de Sierra v. Guatemala, Caso 11.625, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 4/01, OEA/Ser./L/V/II.111 doc. 20 rev., párr. 36 & nota 20 (2001), (citando Karlheinz Schmidt v. Alemania, Corte Europea de Derechos Humanos (ser. A) N° 291-B párr. 24 (1994)), disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/Guatemala11.625.htm>. Véase también Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre terrorismo y



Este escrutinio significa que las justificaciones para distinguir grupos particulares tienen que ser “razonable[s], proporcional[es] y objetivo[s].”<sup>53</sup> Los criterios de razonabilidad y de proporcionalidad quieren decir que la distinción es proporcionalmente necesaria para promover un tratamiento realmente igual.<sup>54</sup> El criterio de la objetividad significa que el trato distinto debe basarse en la realidad objetiva, y no en creencias sociales que reflejan un *status quo* prejuiciado.<sup>55</sup> La Corte precisó que:

[L]os Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de la igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas. . . . Este principio de carácter general debe respetarse y garantizarse siempre.<sup>56</sup>

Tratamientos jurídicos diferentes no serán la causa de desigualdad si: (1) existe una situación que justifique un tratamiento diferente, como condiciones “de debilidad, vulnerabilidad e indefensión,”<sup>57</sup> así como de “marginalización y discriminación”<sup>58</sup> y (2) que el tratamiento distinto sea objetiva y proporcionalmente necesario para compensar esta situación.<sup>59</sup>

En lugar de promover la igualdad, leyes que les quitan poder

---

derechos humanos, párr. 338 & nota 806 (22 de octubre de 2002) (citando CIDH, Informe Anual, OEA/Ser.L/V/II.106 doc. 6 rev. (13 de abril de 1999) (“Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción afirmativa concebidas para promover la participación política de la mujer con los principios de igualdad y no discriminación.”)). En estos informes, la Comisión Interamericana explica que las distinciones legales basadas en clasificaciones “sospechosas,” o sea, especialmente las clasificaciones explícitamente mencionadas en los instrumentos internacionales sobre DDHH, merecen un grado de escrutinio especialmente estricto. Véase *ib.*, por ejemplo, Informe sobre terrorismo y derechos humanos, párr. 338.

53. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, 2003 Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser. A) N° 18, párr. 84 (17 de septiembre de 2003), disponible en [http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_18\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.pdf).

54. *Ib.*, párr. 7 (Juez Salgado Pesantes, concurriendo).

55. Véase Morales de Sierra v. Guatemala, Caso 11.625, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 4/01, OEA/Ser.L/V/II.111 doc. 20 rev., párr. 44 (2001).

56. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, *supra* nota 53, párr. 172.

57. Masacre de Mapiripán v. Colombia, Caso 12.250, 2005 Corte Interamericana de Derechos Humanos, (ser. C) N° 134, párr. 179 (15 de septiembre de 2005), disponible en [http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_134\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf).

58. Comunidad Indígena Sawhoyamaya v. Paraguay, 2006 Corte Interamericana de Derechos Humanos, párr. 189 (29 de marzo de 2006), disponible en [http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_146\\_esp2.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf).

59. Véase *ib.*; Masacre de Mapiripán v. Colombia, Caso 12.250, 2005 Corte Interamericana de Derechos Humanos, (ser. C) N° 134, párr. 179.

a las mujeres agravan estas condiciones.<sup>60</sup> El Centro Para Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el “International Reproductive and Sexual Health Law Programme” [Programa del Derecho de Salud Reproductiva y Sexual] (IRSHLP) de la facultad de derecho de la Universidad de Toronto han notado que esas leyes reproducen el estereotipo de la inferioridad de las mujeres, constituyen una causa intrínseca de la violencia de género y “establecen una situación de dependencia *de jure* de las mujeres, [fomentando] la inferioridad de las mujeres y la subordinación económica.”<sup>61</sup> De hecho, el proyecto de ley antedicho se basó en la ausencia de justificación válida para que el marido sea administrador de los bienes sociales así como de los propios de él y los de su mujer.<sup>62</sup>

---

60. Véase, por ejemplo, Ninth Regional Conference on Women in Latin America and the Caribbean, Mexico City, Mex., June 10-12, 2004, *Roads Towards Gender Equality in Latin America and the Caribbean* [Caminos Hacia La Igualdad de Género en América Latina y el Caribe], p. 48, LC/L.2114(CRM.9/3) (May 2004), disponible en <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/14957/lcl2114i.pdf> (En lo cual la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (ECLAC) considera el hecho problemático de que la desigualdad de género en materias de posesión de tierras está arraigado en los privilegios que los hombres tienen en el matrimonio.). Véase también, Morales de Sierra v. Guatemala, Caso 11.625, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 4/01, OEA/Ser.L/V/II.111 doc. 20 rev., párr. 37-38 45 (2001) (“[E]l hecho de que [la ley] excluya a la mujer casada del ejercicio de la representación conyugal, excepto en circunstancias extremas, no contribuye a una administración ordenada de la justicia ni favorece su protección, la de su hogar o la de sus hijos. Por el contrario, priva a la mujer casada de la capacidad jurídica necesaria para invocar la protección judicial que una administración ordenada de la justicia y la Convención Americana exigen esté a disposición de toda persona. Al exigir que la mujer casada . . . dependa de su marido para representar a la unión, los términos del Código Civil imponen un sistema en el que la capacidad de aproximadamente un mitad de la población de las personas casadas para actuar en una serie de cuestiones esenciales está subordinada a la voluntad de la otra mitad. El efecto global de las disposiciones impugnadas es denegar a la mujer casada su autonomía legal.”).

61. Expediente para el IRSHLP et al. como Amici Curiae Apoyando Campo Algodonero, párr. 29, González y otras (“Campo Algodonero”) v. México, 2009 Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser. C) N° 205 (16 de noviembre de 2009).

62. BOLETÍN N° 1707-18, PROYECTO DE LEY CÓD. CIV., Tramitación de Proyectos, *Moción de los Diputados señorita Saa, señoras Prochelle, Rebolledo y Pollarolo, y señores Palma (don Andrés), Jocelyn-Holt, Balbontín y Pérez (don Aníbal). Modifica el Código Civil y leyes complementarias en materia de sociedad conyugal o comunidad de ganancias otorgando a la mujer y el marido iguales derechos y obligaciones* (04 de octubre de 1995). “La transformación socioeconómica [que] implicó un incremento del sector urbano-industrial, el que ha significado una incorporación de la mujer en el mundo laboral, así como su ascenso hacia posiciones ejecutivas, aunque en una menor proporción que el hombre, tuvo como consecuencia un cambio conductual en orden a compartir ambos cónyuges el rol profesional y el doméstico, proceso generalizado en los países occidentales, en un mayor grado Anglo-América y Europa, y en forma más gradual América Latina incluido Chile.” *Ib.*

## VI. LA POSTURA DEL SISTEMA INTERAMERICANO

A. *María Eugenia Morales de Sierra v. Guatemala*<sup>63</sup>

El 22 de febrero de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición en la que se alegaba que unos artículos del Código Civil de la República de Guatemala, que definen el papel de cada cónyuge dentro del matrimonio, establecían distinciones entre hombres y mujeres que eran discriminatorias y violatorias de varios artículos<sup>64</sup> de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.<sup>65</sup>

Similarmente al Código Civil de Chile, el Código de Guatemala, entre otras cosas, facultaba al esposo para administrar el patrimonio conyugal y confería a este la responsabilidad primaria de administrar los bienes de la unión matrimonial.<sup>66</sup> Los peticionarios solicitaron que la Comisión determinara que esas disposiciones del Código Civil “son incompatibles *in abstracto* con las

63. Véase *María Eugenia Morales de Sierra v. Guatemala*, Caso 11.625, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 4/01, OEA/Ser.L/V/II.111 doc. 20 rev. (2001), disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/Guatemala11.625.htm>.

64. Véase Convención Americana sobre Derechos Humanos, *supra* nota 30, arts. 1, 2, 17 & 24 (respectivamente, las obligaciones generales de respetar los derechos (art. 1) y de adoptar disposiciones de derecho interno para hacerlos efectivos al plano nacional (art. 2), la protección de la familia (art. 17) y la igualdad ante la ley (art. 24)).

65. Véase *Morales de Sierra v. Guatemala*, Caso 11.625, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 4/01, OEA/Ser.L/V/II.111 doc. 20 rev., párr. 1 (2001).

66. Véase *ib.*, párr. 28. La Comisión resume brevemente el contenido de los artículos: “el artículo 109 dispone que la representación conyugal corresponde al marido, aunque ambos cónyuges tienen igual autoridad dentro del hogar. El artículo 110 estipula que el marido tiene ciertas obligaciones de proteger y asistir a la esposa, en tanto ésta tiene el derecho y la obligación especiales de cuidar de los hijos menores y del hogar. El artículo 113 establece que la esposa puede ejercer una profesión o tener otras responsabilidades fuera del hogar sólo en la medida en que ello no perjudique sus responsabilidades en el hogar. El artículo 114 establece que el marido puede oponerse a que la esposa desempeñe actividades fuera del hogar cuando brinde un sustento adecuado del hogar y tenga “motivos suficientemente justificados”. De ser necesario, un juez resolverá las disputas que puedan plantearse en este aspecto. El artículo 115 afirma que la representación conyugal puede ser ejercida por la esposa cuando el marido no lo hace, particularmente cuando abandone el hogar, se encuentre detenido o ausente por otras razones. El artículo 131 establece que el marido administrará el patrimonio conyugal. El artículo 133 establece excepciones a esta norma sobre la misma base establecida en el artículo 115. El artículo 255 dispone que, en los casos en que el marido y la esposa ejerzan la patria potestad, el marido representará a los menores y administrará sus bienes. El artículo 317 establece que ciertas clases específicas de personas pueden ser exceptuadas de ejercer algunas formas de tutela, incluidas, entre otras, las mujeres.” *Ib.* (citando el Código Civil [Cód. Civ.] arts. 109-110, 113-115, 131, 133, 255 & 317 (Guat.)).

garantías dispuestas en . . . la Convención Americana.”<sup>67</sup> Con posterioridad, los demandantes designaron a María Eugenia Morales de Sierra como una víctima concreta porque “[la] jurisdicción contenciosa de la Corte se ejerce con la finalidad de proteger los derechos y libertades de personas determinadas y no con la de resolver casos abstractos.”<sup>68</sup>

La posición de los peticionarios era que el Código Civil de Guatemala establecía distinciones entre el hombre y la mujer que eran discriminatorias y colocaban a la víctima del caso, María Eugenia Morales de Sierra, en situación de subordinación jurídica de su marido y no le permitían ejercer control sobre aspectos importantes de su vida.<sup>69</sup> Los peticionarios alegaron, por tanto, que los artículos del Código violaban los artículos 1(1), 2, 11(2), 17 y 24 de la Convención Americana, o sea, el derecho a la vida privada y familiar de la víctima, el derecho a la protección de la familia y el derecho a la igualdad ante la ley.<sup>70</sup>

El Estado no controvertía la sustancia de estas reclamaciones.<sup>71</sup> Al contrario, reconoció que las disposiciones eran “desactualizadas” y que además contravenían al orden constitucional interno así como a obligaciones convencionales del Estado (haciendo referencia a la Convención Americana y a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).<sup>72</sup> Sin embargo, el Estado se opuso a la admisibilidad de la petición porque Guatemala ya había apoyado iniciativas a favor de enmiendas legislativas todavía pendientes.<sup>73</sup> Además, alegó que los peticionarios no habían agotado los recursos internos de reparación.<sup>74</sup> Después de que la Comisión aprobó la admisibilidad, el Estado siguió sosteniendo que las medidas emprendidas a favor de una reforma demostraban suficientemente su compromiso de defender los derechos protegidos convencionalmente, aunque

---

67. *Ib.*, párr. 3.

68. *Ib.*, párr. 30 (citando Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención, 1994 Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser. A) N° 14, párr. 49 (9 de diciembre de 1994)).

69. Véase *ib.*, párr. 20.

70. Véase *ib.*

71. María Eugenia Morales de Sierra v. Guatemala, Caso 11.625, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 4/01, OEA/Ser./L/V/II.111 doc. 20 rev., párr. 26 (2001), disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/Guatemala11.625.htm>.

72. *Ib.*

73. Véase *ib.*, párrs. 26-27.

74. Véase *ib.*, párr. 27.

dichas reformas todavía estuvieran pendientes.<sup>75</sup>

La Comisión encontró que las iniciativas del Estado guatemalteco a favor de reformas no fueron suficientes, dado que, hasta la fecha de la decisión de la Comisión, no se habían logrado cambios legislativos concretos.<sup>76</sup> Además, los peticionarios consideraban que la vía de solución amistosa ya había sido explorada y agotada. Por tanto, la Comisión concluyó que el Estado no había adoptado las medidas necesarias para garantizar la igualdad de las mujeres dentro del matrimonio.<sup>77</sup>

La Comisión también aceptó la posición de los peticionarios según los cuales "toda distinción de ese tipo debe estar objetivamente justificada en la consecución de fines legítimos y que los medios empleados deben ser proporcionales a esos fines."<sup>78</sup> Por lo tanto, la Comisión evaluó si la distinción de tratamiento de las mujeres se basaba en "criterios razonables y objetivos" que servían un "interés legítimo del Estado" y que empleaba "medios proporcionales" al fin perseguido.<sup>79</sup> Al aplicar estos criterios al caso pendiente, concluyó la Comisión que el Estado estaba persiguiendo el fin legítimo de promover la "certeza y seguridad jurídicas," así como "la necesidad de proteger el hogar y a los hijos, respecto de valores guatemaltecos tradicionales" y "la necesidad de proteger a la mujer en su calidad de esposa y madre."<sup>80</sup> Sin embargo, los medios usados (el tratamiento legal diferente) no eran objetivamente necesarios para lograr estos fines. La Comisión no sólo encontró que no existía una relación de proporcionalidad razonable entre los medios empleados y el objetivo perseguido, sino que tampoco era persuadida que las distinciones citadas eran "siquiera congruentes con los objetivos articulados."<sup>81</sup>

Por lo tanto, la Comisión interamericana llegó a las conclusiones siguientes:

El hecho de que la ley otorgue una serie de capacidades legales exclusivamente al marido establece una situación de dependencia de jure para la esposa y crea un desequilibrio incorregible en la autoridad de los esposos dentro

---

75. Véase *ib.*

76. Véase *ib.*, párr. 29.

77. Morales de Sierra v. Guatemala, Caso 11.625, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 4/01, OEA/Ser./L/V/II.111 doc. 20 rev., párr. 45 (2001).

78. *Ib.*, párr. 21.

79. *Ib.*, párr. 31.

80. *Ib.*, párr. 37.

81. *Ib.*

del matrimonio. Además, las disposiciones del Código Civil aplican conceptos estereotipados de las funciones de la mujer y del hombre que perpetúan una discriminación de facto contra la mujer en la esfera familiar y que tienen el efecto ulterior de dificultar la capacidad de los hombres para desarrollar plenamente sus papeles dentro del matrimonio y de la familia. Los artículos en cuestión crean desequilibrios en la vida familiar, inhiben el rol del hombre respecto del hogar y los hijos y, en tal sentido, privan a éstos de una atención plena y equitativa de ambos padres.<sup>82</sup>

Consecuentemente, la Comisión decidió que los artículos impugnados del Código Civil violan los derechos de la familia y de la igualdad entre la ley protegidos por la Convención Americana así como el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad de género dentro del matrimonio.<sup>83</sup>

Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía no se ha pronunciado sobre el tema de igualdad de género, este informe de la Comisión interamericana extiende de manera perfectamente lógica la jurisprudencia de la Corte sobre la igualdad al tema más particular de la igualdad de género—y a la luz de la misma jurisprudencia europea que guió la Corte interamericana en su jurisprudencia sobre la igualdad.

### *B. Caso Sonia Arce Esparza v. Chile*<sup>84</sup>

El 10 de octubre de 2003, la Comisión interamericana emitió un informe de admisibilidad en el caso *Sonia Arce*.<sup>85</sup> La peticionaria y presunta víctima, Sonia Arce Esparza, alegó que algunos artículos del Código Civil chileno, relacionados con la administración de bienes, violaban la Convención Americana y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.<sup>86</sup> El caso es similar al caso *Morales de Sierra*.<sup>87</sup> Se impugnó, entre otros artículos del Código Civil, la disposición que

---

82. *Ib.*, párr. 44.

83. *Morales de Sierra v. Guatemala*, Caso 11.625, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 4/01, OEA/Ser./L.V/II.111 doc. 20 rev., párr. 45 (2001).

84. Véase *Sonia Arce Esparza v. Chile*, Caso 071/01, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 59/03, OEA/Ser./L.V/II.118, doc. 70 rev. 2 en 213 (2003), disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/Chile071.01.htm>.

85. Véase *ib.*

86. Véase *ib.*, párr. 12. Véase también Convención Americana sobre Derechos Humanos, *supra* nota 30; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, *supra* nota 30.

87. Véase *supra* Parte VI.A.

establece que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y el que administra los bienes sociales y los de su mujer.<sup>88</sup> A causa de dicha disposición, la Sra. Arce Esparza no pudo vender algunos inmuebles que heredó de sus padres sin el consentimiento de su esposo.<sup>89</sup> Los co-peticionarios (CEJIL y la Corporación de la Morada<sup>90</sup>) alegaron *inter alia* la violación de los derechos de protección de la familia, de propiedad privada, de igualdad ante la ley y de protección judicial.<sup>91</sup> Por su parte, el Estado sostuvo que la petición no era admisible porque no se habían agotado los recursos internos.<sup>92</sup>

La Comisión rechazó el argumento del Estado porque “ninguno de los recursos disponibles [permitían] a la Sra. Arce Esparza impugnar directamente las normas contestadas en tanto [afectaban] sus derechos por su simple vigencia.”<sup>93</sup> Al contrario, aunque existieran recursos (de “protección” y “de inaplicabilidad”<sup>94</sup>), exigir que las mujeres siempre tengan que someterse “a ulteriores aplicaciones de las normas para poder impugnarlas” viola los derechos de las mujeres a la igual protección de la ley, haciendo inadecuados los recursos internos disponibles.<sup>95</sup> Por lo tanto, la Comisión declaró que el caso era admisible.<sup>96</sup>

Los peticionarios y el Estado llegaron a una solución amistosa que se encuentra actualmente en la etapa de seguimiento.<sup>97</sup> El acuerdo de solución amistosa pedía *inter alia* que se derogaran las normas que establecen la discriminación de las mujeres en el régimen de sociedad conyugal.<sup>98</sup> Hasta ahora, se puede alegar que

---

88. Véase *Arce Esparza v. Chile*, Caso 071/01, párr. 14 (citando CÓDIGO CIVIL [Cód. Civ.] art. 1749 (Chile)).

89. Véase *ib.*, párr. 13.

90. Véase *ib.*, párr. 8.

91. Véase *ib.*, párr. 2. Los artículos invocados fueron los artículos 1, 2, 17, 21, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, *supra* nota 30, y los arts. 1, 2, 5(a), 15(1), 15(2) y 16(1) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, A.G. Resolución 34/180, *supra* nota 30.

92. Véase *Sonia Arce Esparza v. Chile*, Caso 071/01, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 59/03, OEA/Ser./L.V/II.118, doc. 70 rev. 2 en 213, párr. 3 (2003), disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/Chile071.01.htm>.

93. *Ib.*, párr. 27.

94. *Ib.*, párr. 28.

95. *Ib.*, párrs. 27-28.

96. Véase *ib.*, párr. 35(1).

97. Véase, en general, Acuerdo de Solución Amistosa, *Sonia Arce Esparza v. Chile*, Caso 12.433, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 59/03 (2007), disponible en [http://www.humanas.cl/documentos/440Acuerdo\\_de\\_Solucion\\_Amistosa\\_030507.pdf](http://www.humanas.cl/documentos/440Acuerdo_de_Solucion_Amistosa_030507.pdf).

98. Véase *ib.*, p. 1.

Chile sigue violando los derechos anteriormente dichos, dado que el proyecto de reforma legislativa no ha dado resultado hasta la fecha de hoy.

## VII. ESTÁNDARES MÍNIMOS EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE ESPOSOS

Fui encargado por CEJIL de redactar un documento de consulta para actores políticos con el fin de presentar al Estado chileno unas condiciones mínimas que debían ser incorporadas en el régimen legal matrimonial reformado. Eran condiciones *sine qua non* para que siga progresando la solución amistosa. La sección que sigue se basa sobre la posición que desarrollé con los abogados de CEJIL, pero representa mi opinión individual y no necesariamente la posición institucional de CEJIL. El objetivo de esta última sección es articular los estándares mínimos que todo régimen matrimonial debería respetar de conformidad con el principio fundamental de la igualdad de género.

### A. Administración indistinta de bienes y eliminación del patrimonio reservado

El régimen legal suplementario contratado por el mero hecho del matrimonio—a falta de hacer un pacto en contrario para someterse a un régimen distinto—debe ser un régimen comunitario en el cual ambos esposos tienen igual derecho a administrar los bienes sociales.

Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establecen que los hombres y las mujeres tendrán los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio,<sup>99</sup> lo que incluye los derechos “en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes.”<sup>100</sup> Este estándar también fue promulgado por el Comité de los Ministros Europeo.<sup>101</sup>

---

99. Véase Convención Americana sobre Derechos Humanos, *supra* nota 30, art. 17(4).

100. Véase Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, A.G. Resolución 34/180, *supra* nota 30, art. 16(c) & (h).

101. Véase Council of Europe Committee of Ministers [Comité de Ministros del Consejo de Europa], Resolución 78 (37) sobre la igualdad de los cónyuges en el derecho civil, 292da Sesión, Resolución N° 78/37, párr. 1, 11-12 (27 de septiembre de 1978), disponible en <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=596422&SecMode=1&DocId=662346&Usage=2> (recomendando que los estados miembros hagan las gestiones necesarias para



A continuación, haremos referencia al “Régimen matrimonial primario del Código Civil francés,” es decir, las normas que el legislador francés estableció como preceptos mínimos que se aplican a todos los esposos.<sup>102</sup> La doctrina las llama “régimen matrimonial primario” o “estatuto básico imperativo.” Es un régimen general, por lo cual se aplica indistintamente del régimen conyugal determinado para la unión o la fecha en la que se llevó a cabo la misma. Es de orden público (*d’ordre public*) porque se aplica a todas las parejas casadas viviendo en Francia—independientemente de su nacionalidad—y porque no puede ser derogado por convenciones particulares.<sup>103</sup> Estas normas consagran deberes y derechos básicos que los esposos tienen, y equilibran el interés de la familia<sup>104</sup> y la libertad de cada cónyuge.<sup>105</sup> Los derechos y obligaciones que menciona se aplican igualmente a los hombres y a las mujeres y establece explícitamente “que los cónyuges aseguran

---

asegurar que sus códigos civiles respectivos no contengan inigualdades genéricas). Véase también Comité de Ministros del Consejo de Europa, *Recomendación sobre la protección jurídica contra la discriminación por razón de sexo*, 380a Sesión, Recomendación N° R (85) 2 app., párr. 4 (5 de febrero de 1985), disponible en <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=605110&SecMode=1&DocId=686454&Usage=2> (“In the field of civil law, equal rights and duties should be given to both men and women, in particular with regard to . . . the acquisition, administration and sharing of family property.”).

102. Estas normas se encuentran en el capítulo sexto, “Des devoirs et des droits respectifs des époux” [De los deberes y derechos respectivos de los cónyuges], en el título quinto del libro primero del código civil francés. CODE CIVIL [C. civ.] arts. 212-226 (Fr.), disponible en español en [http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes\\_traduits/civetxt.htm](http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/civetxt.htm).

103. Véase *ib.*, art. 226 (Fr.).

104. Por ejemplo, para ilustrar la protección de los intereses de la familia, el artículo 217 prevé que “un cónyuge puede estar autorizado ante la justicia a realizar por sí mismo un acto para el que sería necesaria la ayuda o el consentimiento del otro . . . si su negativa no estuviera justificada por el interés familiar.” *Ib.*, art. 217. Además, el artículo 214 prevé que “si uno de los cónyuges no cumple sus obligaciones, podrá ser obligado a hacerlo por el otro en las formas previstas en el Código de Enjuiciamiento Civil.” *Ib.*, art. 214 (Fr.). También articulan las excepciones a la obligación solidaria de los esposos por las deudas contraídas por uno o el otro. Véase *ib.*, art. 220. Estas normas también restringen la libertad individual personal de cada cónyuge al definir otros deberes más intangibles/intimos que corresponden a una definición mínima del matrimonio: obligación a guardarse fidelidad, socorrerse y ayudarse mutuamente, véase *ib.*, art. 212, y a una convivencia conyugal, véase *ib.*, art. 215.

105. Para ilustrar la protección de la libertad de cada cónyuge, el artículo 221 dispone que “cada cónyuge puede abrir, sin el consentimiento del otro, cualquier cuenta de depósito y cualquier cuenta de títulos en su nombre personal.” *Ib.*, art. 221. El artículo 223 dice que “cada cónyuge puede ejercer libremente una profesión, percibir sus ganancias y salarios y disponer de ellos después de satisfacer las cargas del matrimonio,” y el artículo 225 dice que “cada cónyuge administra, obliga y enajena sólo sus bienes personales.” *Ib.*, arts. 223 & 225.

conjuntamente la dirección moral y material de la familia.”<sup>106</sup>

El régimen matrimonial obligatorio del Código Civil francés igualmente prevé que ambos cónyuges tienen poder para celebrar los contratos que tengan por objeto el mantenimiento familiar o la educación de los hijos.<sup>107</sup> Por su parte, las leyes que rigen el régimen matrimonial en Paraguay y en Perú también establecen que ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo.<sup>108</sup>

El Código Civil chileno establece que las mujeres tienen un “patrimonio reservado,” por lo cual se consideran separadas de bienes respecto del ejercicio de su empleo o profesión, si desempeña aquella profesión separadamente del marido.<sup>109</sup> Cuando se disuelve la sociedad conyugal, el patrimonio reservado de la mujer entrará en la partición de los gananciales; a menos que la mujer o sus herederos renunciaren a estos últimos, en cuyo caso el marido no responderá por las obligaciones contraídas por la mujer en su administración separada.<sup>110</sup>

Siguiendo la reforma legal hecha en Francia en 1907,<sup>111</sup> Chile, dieciocho años después, agregó a su Código Civil la institución del patrimonio reservado, con el fin de corregir situaciones en las cuales la mujer trabajaba y ganaba dinero que no podía administrar, lo que se prestaba para abusos por parte del cónyuge.<sup>112</sup> Aun-

---

106. *Ib.*, art. 213.

107. Véase *ib.*, art. 220 (estableciendo también que “las deudas contraídas de este modo por uno obligan solidariamente al otro”). Véase también *ib.*, art. 215 (“Los cónyuges no pueden disponer, el uno sin el otro, de los derechos por los que se asegura el alojamiento familiar, ni de los muebles que contiene.”).

108. Ley 1/92 art. 6, 15 de julio de 1992 (Para.) (“El marido y la mujer tienen en el hogar deberes, derechos y responsabilidades iguales, independientemente de su aporte económico al sostenimiento del hogar común. Se deben recíprocamente respeto, consideración, fidelidad y asistencia.”); Código Civil [Cód. Civ.] art. 290 (Perú) (“Igualdad en el hogar”) (“Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos compete, igualmente, fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar.”).

109. Código Civil [Cód. Civ.] art. 150 (Chile).

110. *Ib.*

111. Véase Loi ayant pour objet d'assurer à la femme mariée la libre disposition des fruits de son travail [Ley para garantizar a la mujer casada la libre disposición de las frutas de su trabajo] de 13 de julio de 1907, Journal Officiel de la République Française [J.O.] [Diario Oficial de Francia], 16 de julio de 1907, disponible en [http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/images/loi\\_du\\_11juillet1907.pdf](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/images/loi_du_11juillet1907.pdf).

112. Ley 5.521, Ministerio de Justicia, 14 de diciembre de 1934 (Chile) (incorporado al Cód. Civ. art. 150), disponible en [http://www.leychile.cl/Consulta/Exportar?radioExportar=normas&exportar\\_formato=pdf&nombrearchivo=LEY-5521\\_19-DIC-1934&](http://www.leychile.cl/Consulta/Exportar?radioExportar=normas&exportar_formato=pdf&nombrearchivo=LEY-5521_19-DIC-1934&)

que en sí mismo fue un paso positivo—el primero—hacia la igualdad entre mujeres y hombres al mitigar la potestad del marido heredada del Código Napoleón, solamente era necesario porque “no existía norma alguna que reglamentara lo que la mujer obtenía en el fruto de su trabajo personal.”<sup>113</sup> En Chile también, el Decreto Ley Número 328, que dio luz al patrimonio reservado de la mujer fue “el primero en ampliar la capacidad jurídica de la mujer,”<sup>114</sup> pero solamente constituía una protección mínima para ésta y del bienestar de su familia para compensar de manera limitada un régimen esencialmente desigual. Por consiguiente, el patrimonio reservado es una institución anacrónica que carece de utilidad en un régimen igualitario y que además puede llegar a constituirse como un argumento jurídico justificador de la perpetuación del carácter desigual del actual régimen de administración del patrimonio matrimonial.

### *B. Administración de la mujer de sus bienes propios*

La capacidad de administrar los bienes propios es fundamentalmente una cuestión de derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad es reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos<sup>115</sup> y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.<sup>116</sup> Es también reconocido en la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea<sup>117</sup> y en el Protocolo N° 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.<sup>118</sup> Igualmente es reconocido en varias constituciones de países europeos y america-

---

exportar\_con\_notas\_bcn=true&exportar\_con\_notas\_originales=true&exportar\_con\_notas\_al\_pie=true&hddResultadoExportar=25125.1934.0.0%23.

113. RODRÍGUEZ GREZ, *supra* nota 39, p. 192.

114. *Ib.*

115. Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G. Resolución 217A, *supra* nota 30, art. 17.

116. Convención Americana Sobre Derechos Humanos, *supra* nota 30, art. 21 (“Derecho a la Propiedad Privada”).

117. Véase Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, *supra* nota 30, art. 17 (“Derecho a la propiedad”).

118. Protocolo Adicional al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, *supra* nota 30, art. 1 (“Protección de la propiedad”).

nos,<sup>119</sup> incluso en la Constitución chilena.<sup>120</sup> Esencialmente, estos instrumentos legales exigen que toda persona tenga derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, administrarlos y a disponer de ellos.

De manera más específicamente vinculada con la igualdad de género, el artículo 15(2) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece que:

[l]os Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.<sup>121</sup>

Varios códigos civiles de la región y otras leyes que rigen la administración de los bienes propios ya establecen que cada cónyuge deberá tener la libre administración y disposición de sus bienes propios. Los bienes que son considerados como “propios” varían según los regímenes matrimoniales. En comunidades de gananciales o de bienes, serán generalmente, por ejemplo, los bienes que los esposos tienen a tiempo del matrimonio o que reciben a título gratuito y bienes “personales” como pensiones, indemnizaciones o instrumentos útiles para el ejercicio de su profesión. Igualmente, el régimen matrimonial primario del Código Civil francés actual prevé que “[c]ada cónyuge administra, obliga y enajena sólo sus bienes personales.”<sup>122</sup> Sea cual sea la “lista” exacta de “bienes propios” o el régimen legal suplementario vigente, lo que importa y lo que ya fue realizado en la mayoría de

---

119. Véase Note from the Praesidium, *Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union, Text of the explanations relating to the complete text of the Charter as set out in CHARTE 4487/00 CONVENT 50* [Explicación del artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea], [http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_en.pdf) (última conexión el 31 de marzo de 2010).

120. Véase Chile Const. art. 10, párr. 10.o, disponible en [http://www.leychile.cl/Consulta/Exportar?radioExportar=normas&exportar\\_formato=pdf&nombresearchivo=LEY-S%2FN\\_18-SEP-1925&exportar\\_con\\_notas\\_bcn=true&exportar\\_con\\_notas\\_originales=true&exportar\\_con\\_notas\\_al\\_pie=True&hddResultadoExportar=131386.1925-09-18.0.0%23](http://www.leychile.cl/Consulta/Exportar?radioExportar=normas&exportar_formato=pdf&nombresearchivo=LEY-S%2FN_18-SEP-1925&exportar_con_notas_bcn=true&exportar_con_notas_originales=true&exportar_con_notas_al_pie=True&hddResultadoExportar=131386.1925-09-18.0.0%23).

121. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, A.G. Resolución 34/180, *supra* nota 30, art. 15(2).

122. CODE CIVIL [C. CIV.] art. 225 (Fr.). Véase también *ib.*, art. 221 (Fr.) (“Cada cónyuge puede abrir, sin el consentimiento del otro, cualquier cuenta de depósito y cualquier cuenta de títulos en su nombre personal. Con respecto al depositario, se considera siempre que el depositante goza de la libre disposición de los fondos y los títulos en depósito, incluso tras la disolución del matrimonio.”).

los países de América Latina, es que cada cónyuge conserve la libre administración de sus bienes propios, así como el poder de disponer de ellos o gravarlos.<sup>123</sup>

### C. *Libertad de la mujer en la vida civil*

La mujer debe tener, en materia civil, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. Eso implica iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes, así como un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.

El derecho internacional establece que los hombres y las mujeres serán iguales ante la ley, y que las mujeres, en materias civiles, tendrán una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad.<sup>124</sup> El régimen matrimonial primario del Código Civil francés estipula que “[c]ada cónyuge posee plena capacidad de derecho.”<sup>125</sup> Esta capacidad de actuar en la vida civil se refleja en la habilidad de la mujer de administrar sus bienes propios, como ya hemos visto, y también en su derecho y deber de participar en el gobierno del hogar, como fue consagrado en el régimen matrimonial primario

---

123. Véase, por ejemplo, Código Civil de la República Oriental del Uruguay [Cód. Civ.] art. 1970 (1868), rev. 1914, 1994 (“Cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, de sus frutos, del producto de sus actividades y de los bienes que pueda adquirir, sin perjuicio de lo que se dispone en los artículos siguientes”); Código Civil [Cód. Civ.] art. 1276 (Arg.) (“Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales adquiridos con su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo.”); Código Civil [Cód. CIV] art. 301-03 (Perú) (dando una lista de “bienes propios” que son extraídos de la sociedad matrimonial y precisando que “[c]ada cónyuge conserva la libre administración de sus bienes propios y puede disponer de ellos o gravarlos.”); Código de Familia [Cód. FAM.] art. 103-09 (Bol.) (estableciendo que “[c]ada uno de los esposos tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios” y definiendo dichos bienes propios); Ley 1/92 (Para.), *supra* nota 108, arts. 30-37 (regiendo los bienes que constituyen la comunidad de gananciales; en particular, los artículos 31 y 32 definen los bienes sociales y los bienes propios).

124. Véase Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, A.G. Resolución 34/180, *supra* 30, art. 15. Véase también Protocolo número 7 al convenio europeo para la salvaguardia de los derechos humanos y las libertades fundamentales art. 5, el 4 de noviembre de 1950, E.T.S. 117, *disponible en español en* [http://www.idhc.org/esp/documents/biblio/DD\\_HH/EUROPA/Protocolo7.pdf](http://www.idhc.org/esp/documents/biblio/DD_HH/EUROPA/Protocolo7.pdf) (“Los cónyuges gozan de igualdad de derechos y deberes de carácter civil, entre ellos y en sus relaciones con sus hijos, por lo que se refiere al matrimonio, durante el mismo y en caso de disolución. El presente artículo no impide que los Estados adopten las medidas necesarias en interés de los hijos.”); Comité de Ministros del Consejo de Europa, Recomendación N° R (85), *supra* nota 101, párr. 4.

125. C. civ. art. 216 (Fr.).

del Código Civil francés<sup>126</sup> y en leyes nacionales de otros países de América Latina.<sup>127</sup>

Aunque actualmente en Chile, la mujer no esté legalmente limitada en su libertad de trabajo, cabe mencionar que la libertad de la mujer en la vida civil también implica, desde luego, el derecho a ejercer libremente cualquier profesión o industria permitidas por la ley, lo que también fue reconocido explícitamente en el Código Civil francés<sup>128</sup> y en leyes nacionales latinoamericanas.<sup>129</sup>

La desigualdad *de jure* entre los esposos limita la capacidad de la mujer de actuar en la vida civil y por lo tanto constituye una forma de violencia multidimensional. Por ejemplo, en su informe sobre la igualdad de género en América Latina del 2004, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe consideró que el hecho problemático de la desigualdad en materias de posesión de tierras está arraigado en los privilegios que los hombres tienen en el matrimonio.<sup>130</sup> El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer comentó sobre la obligación internacional de reconocer a la mujer, “en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades” así como

---

126. Véase *ib.*, art. 213 (“Los cónyuges aseguran conjuntamente la dirección moral y material de la familia. Proveen la educación de los hijos y preparan su futuro.”).

127. Por ejemplo, el código civil peruano estipula que “[a]mbos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo.” Cód. Civ. art. 290 (Perú). También estipula que “[l]a representación de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por los cónyuges,” y que “[p]ara las necesidades ordinarias del hogar y actos de administración y conservación, la sociedad es representada indistintamente por cualquiera de los cónyuges.” *Ib.*, art. 292. La Ley 1/92 de la reforma parcial del código civil, delimitando el régimen matrimonial paraguayo, también establece que “[c]ualquiera sea el régimen patrimonial adoptado, cada cónyuge tiene el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar. A ambos compete igualmente decidir en común las cuestiones referentes a la economía familiar.” Ley 1/92 (Para.), *supra* nota 108, art. 15.

128. Véase C. civ. art. 223 (Fr.) (“Cada cónyuge puede ejercer libremente una profesión, percibir sus ganancias y salarios y disponer de ellos después de satisfacer las cargas del matrimonio.”).

129. Véase, e.g., Cód. Civ. art. 293 (Perú) (estipulando que “[c]ada cónyuge puede ejercer cualquier profesión o industria permitidos por la ley, así como efectuar cualquier trabajo fuera del hogar, con el asentimiento expreso o tácito del otro.”); Ley 1/92 (Para.), *supra* nota 108, art. 7 (estipulando que “[c]ada cónyuge puede ejercer cualquier profesión o industria lícitas y efectuar trabajos fuera de la casa o constituir sociedades para fines lícitos.”). Véase también María Eugenia Morales de Sierra v. Guatemala, Caso 11.625, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 4/01, OEA/Ser./L/V/II.111 doc. 20 rev., párr. 39 (2001); Ato del Avellanal v. Perú, Comité de Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas, Comunicación N° 202/1986, CCPR/C/34/D/202/1986, párr. 10.2 (1986).

130. Véase *Caminos Hacia La Igualdad de Género en América Latina y el Caribe*, *supra* nota 60, p. 48.

“iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes.”<sup>131</sup>  
El CEDAW explicó:

Cuando la mujer no puede celebrar un contrato en absoluto, ni tener acceso a créditos financieros, o sólo lo puede hacer con el consentimiento o la garantía de su marido o un pariente masculino, se le niega su autonomía jurídica. Toda restricción de ese género le impide poseer bienes como propietaria exclusiva y le imposibilita la administración legal de sus propios negocios o la celebración de cualquier otro tipo de contrato. Las restricciones de dicha índole limitan seriamente la capacidad de la mujer para proveer a sus necesidades o a las de sus familiares a cargo.<sup>132</sup>

La Comisión Interamericana, en un caso parecido al de Sonia Arce, emitió la siguiente opinión:

Al exigir que la mujer casada . . . dependa de su marido para representar a la unión, los términos del Código Civil imponen un sistema en el que la capacidad de aproximadamente un mitad de la población de las personas casadas para actuar en una serie de cuestiones esenciales está subordinada a la voluntad de la otra mitad. El efecto global de las disposiciones impugnadas es denegar a la mujer casada su autonomía legal. El hecho de que el Código Civil prive a [la víctima], como mujer casada, de la capacidad legal a la que otros [hombres del mismo país] tienen derecho, hace vulnerables sus derechos a una violación sin recurso.<sup>133</sup>

Pues, la incapacidad *de jure* de actuar en la vida civil, como el hombre, tiene causas y consecuencias complejas, reflejando y fortaleciendo la concepción de la mujer como subordinada y haciéndola tanto discapacitada en el plano civil como indefensa en el plano de su integridad física y su integridad política como ciudadana. Por eso, la estereotipación legal en razón del género es ampliamente reconocida como una causa originaria y también consecuencia de la violencia del género<sup>134</sup> que es un tipo de

---

131. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, A.G. Resolución 34/180, *supra* nota 30, art. 15(2).

132. La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, Recomendación general N° 21, Organización de las Naciones Unidas CEDAW, 13° período de sesiones, párr. 7, ONU Doc. A/49/38 (4 de febrero de 1994).

133. Morales de Sierra v. Guatemala, Caso 11.625, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 4/01, OEA/Ser./L/V/II.111 doc. 20 rev., párr. 38 (2001).

134. Véase Expediente para el IRSHLP et al. como Amici Curiae Apoyando Campo Algodonero, *supra* nota 61, párr. 38.

violencia multidimensional de gran alcance.<sup>135</sup>

En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención do Belem do Pará”, ratificada por Chile en 1996,<sup>136</sup> los Estados Partes reconocieron que “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.”<sup>137</sup> Además, prescribieron que “[t]oda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”<sup>138</sup> y que “[e]l derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye . . . el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.”<sup>139</sup>

Consecuentemente, todo régimen matrimonial que vulnera la libertad de la mujer de actuar en la vida civil tiene implicaciones graves que van más allá de la desigualdad dentro del matrimonio.

#### D. *Un régimen matrimonial igual*

El régimen matrimonial subsidiario que el Código Civil francés actual establece es un régimen comunitario (*régime de la communauté*).<sup>140</sup> Otros países de América Latina establecen

---

135. La violencia contra la mujer, Recomendación General N° 19, Organización de las Naciones Unidas CEDAW, 11° período de sesiones, párr. 11, ONU Doc. A/47/38 (29 de enero de 1992) ( “Las actitudes tradicionales, según las cuales se considera a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción, como la violencia y los malos tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión femenina. Esos prejuicios y prácticas pueden llegar a justificar la violencia contra la mujer como una forma de protección o dominación. El efecto de dicha violencia sobre su integridad física y mental es privarla del goce efectivo, el ejercicio y aun el conocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Si bien en esta observación se hace hincapié en la violencia real o las amenazas de violencia, sus consecuencias básicas contribuyen a mantener a la mujer subordinada, a su escasa participación en política y a su nivel inferior de educación y capacitación y de oportunidades de empleo.”).

136. Véase Departamento de Derecho Internacional, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención De Belem Do Pará, <http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-61.html> (última conexión el 31 de marzo de 2010).

137. Organización de los Estados Americanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, 6 de septiembre de 1994, 33 I.L.M. 1534, al preámbulo, *disponible en* <http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/equidadgenero/content/marco/docs/1.pdf>.

138. *Ib.*, art. 5.

139. *Ib.*, art. 6.

140. CODE CIVIL [C. CIV.] art. 1400 (Fr.).



regímenes comunitarios que se contraen por el mero hecho del matrimonio si los esposos no eligieron otro régimen en convenciones matrimoniales.<sup>141</sup> En estos regímenes, comúnmente llamados "comunidad de gananciales," se diferencian los "bienes sociales" a los "bienes propios." Los bienes de la comunidad (bienes "comunes" o "sociales") incluyen los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo y generalmente todos los bienes que no son "propios."<sup>142</sup>

Los regímenes matrimoniales suplementarios de Perú y de Paraguay, así como el régimen obligatorio de Bolivia, ejemplifican cómo puede funcionar un régimen matrimonial con administración conjunta de los bienes comunes (llamados "sociales" en la "sociedad de gananciales" peruviana<sup>143</sup> o "comunes" en la "comunidad de gananciales" boliviana<sup>144</sup> y paraguaya<sup>145</sup>). Los tres regímenes legales estipulan que la administración y gestión del patrimonio común corresponde indistintamente a cada uno de los cónyuges.<sup>146</sup>

141. Véase Ley 1/92 (Para.), *supra* nota 108, art. 24 (Para.) (estableciendo una comunidad de gananciales); Código Civil [Cód. Civ.] art. 295 (Perú) (estableciendo una sociedad de gananciales); Código de Familia [Cód. FAM.] art. 101-02 (Bol.) (estableciendo una comunidad de gananciales).

142. Véase *supra* el texto acompañando nota 122 para una definición de los "bienes propios."

143. Cód. Civ. arts. 295 & 310 (Perú).

144. Cód. FAM. arts. 101-02, 111 (Bol.).

145. Ley 1/92 (Para.), *supra* nota 108, arts. 24 & 32 (Para.).

146. En Perú, el régimen matrimonial por defecto es una "sociedad de gananciales," la sola alternativa siendo la "separación de patrimonios." Cód. Civ. art. 295 (Perú). Como todos los regímenes de administración conjunta de un patrimonio matrimonial común, excluye una lista de "bienes propios," que siguen siendo administrados por cada cónyuge, pero todos los otros bienes son "bienes sociales," es decir, bienes de la sociedad de gananciales. *Ib.*, arts. 302 & 310-11. El patrimonio común está administrado por los dos cónyuges. Véase *ib.*, art. 313 ("Corresponde a ambos cónyuges la administración del patrimonio social.").

En Bolivia, el Código de Familia establece un solo régimen matrimonial del cual no se puede derogar por convenios particulares. Véase Cód. FAM. art. 102 (Bol.). Igual a Perú, es una comunidad de gananciales y los bienes comunes son administrados por ambos cónyuges. Véase Cód. FAM. arts. 101, 114 (Bol.).

En Paraguay, la Ley N° 1/92 de la reforma parcial del código civil estableció que hubiera tres regímenes posibles que serían reconocidos legalmente como regímenes patrimoniales matrimoniales. Véase Ley 1/92 (Para.), *supra* nota 108, art. 22 (Para.). A falta de capitulaciones matrimoniales, el régimen por defecto es el de la "comunidad de gananciales bajo administración conjunta." *Ib.* art. 24. Como en Perú y en Bolivia, el legislador paraguayo previó que ambos cónyuges representaran y administraran igualmente la comunidad conyugal. Véase, *por ejemplo*, *ib.* arts. 38 ("Corresponde a ambos cónyuges conjuntamente la representación legal de la comunidad conyugal."), 40 ("Corresponde a ambos cónyuges conjunta o indistintamente a cada uno de ellos la gestión y administración de los bienes gananciales."), & 41 ("Para las necesidades

## VIII. CONCLUSIÓN

En todos los regímenes, los cónyuges deberían asegurar conjuntamente la dirección moral y material de la familia y deberían tener los mismos derechos y responsabilidades en cuanto a sus bienes propios y a los bienes comunes, no obstante su género.

Cualquiera que sea el régimen matrimonial por defecto (comunitario o de separación de bienes), el principio de igualdad es inderogable y debe ser de orden público.<sup>147</sup> Que los cónyuges administren la comunidad matrimonial conjunta o separadamente, la norma general es que no se deben crear distinciones basadas en razón del género que no son objetivas y proporcionalmente necesarias para lograr un objetivo legítimo.

La presente exposición ha revelado argumentos mediante los cuales se permite evidenciar la necesidad impostergable de que aquellas leyes nacionales que crean distinciones legales basadas en el género deban ser inspeccionadas muy severamente. Nuestra presentación de las fuentes internacionales y regionales que garantizan la igualdad de género y de las leyes nacionales que la incorporaron dentro del marco de los regímenes matrimoniales domésticos de América Latina, igualmente sugiere que no cabe duda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al pronunciarse sobre el tema de la igualdad de género, seguirá los pasos de la Corte Europea de Derechos Humanos, ya seguidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Chile reconoció que tenía la obligación de ajustar su régimen legal matrimonial a los estándares en materia de igualdad en el marco latinoamericano de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de sus obligaciones tanto a nivel constitucional como convencional y de sus proyectos de reforma legal, el Estado chileno todavía posee un régimen matrimonial que contribuye a estereotipar a la mujer, poniéndola en una situación de subordinación social y económica respecto de su cónyuge.

---

ordinarias del hogar la comunidad puede ser administrada indistintamente por el marido o por la mujer.”).

147. Por ejemplo, el régimen matrimonial primario del código civil francés es de orden público, es decir, inderogable por capitulaciones matrimoniales, salvo en casos explícitamente permitidos. Véase CODE CIVIL [C. CIV.] art. 226 (Fr.).